

Líbano: complejo panorama *tras explosión en Beirut*

El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, anunció el lunes 10 la dimisión de todo el gobierno nacional, en medio de una extendida crisis social y de las consecuencias de la masiva explosión que devastó la capital del país la semana pasada.

“Hoy respondemos al deseo de los ciudadanos de exigir transparencia a quienes han sido responsables del desastre que ha estado oculto durante siete años y a su deseo de un cambio real. Frente a esta realidad, anuncio la dimisión de este gobierno”, dijo Diab.

El mandatario saliente habló de un sistema político corrupto al que acusó de haber obstaculizado su gobierno de forma incesante, y señaló que la tragedia era *“el resultado de una corrupción endémica”*.

El propio Diab había propuesto en la tarde del sábado 8 llamar a elecciones anticipadas *“como única salida a la crisis”*. Esta propuesta fue secundada al día siguiente por el patriarca maronita, cardenal Bechara Boutros Rai: *“Es necesario, por respeto al sentir de los libaneses y de la inmensa responsabilidad requerida, que el Gobierno completo renuncie, porque ha sido incapaz de hacer avanzar al país”*.

La cadena de renuncias de altos funcionarios comenzó el domingo 9, cuando Manal Abdel Samad, ministra de Información, presentó su dimisión pidiendo perdón al pueblo libanés, *“cuyas aspiraciones hemos sido incapaces de colmar”*.

Estos hechos políticos son consecuencia de la indignación popular contra la élite política libanesa, después de un período de nueve meses de protestas ciudadanas. El sábado 8 de agosto estas llegaron a su momento más alto, con un policía muerto y más de 700 heridos. La colosal explosión el martes 4 de un almacén con 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto capitalino, que dejó 159 muertos y más de 6.000 heridos, incrementó la fuerza de las manifestaciones callejeras.

Los manifestantes piden la salida en bloque de la élite política, a la que responsabilizan del accidente y cuya onda expansiva sacudió también al Parlamento, donde hasta el martes 11 nueve de los 128 diputados habían renunciado.

“El pueblo debe hacerse con las instituciones estatales porque el gobierno que tenemos vive en la desidia y no ha hecho nada en nueve meses de mandato”, era la consigna que se gritaba en la noche del sábado a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores, pocas horas antes de ser desalojados a la fuerza por el Ejército libanés. *“La comunidad internacional no debe darle una sola libra a esa banda de corruptos”,* coreaban en alusión a la conferencia de donantes para Líbano que ha liderado Francia y que ha reunido más de 250 millones de dólares en ayuda. En la tarde del sábado, miles de ciudadanos tomaron durante algunas horas el control de los inmuebles de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y de Medio Ambiente, en los que prendieron fuego a varias oficinas y saquearon sus archivos.

La sangre vertida de ciudadanos libaneses junto con los 300.000 vecinos que se han visto sin hogar en los barrios más afectados por la explosión en el puerto, ha dejado en *shock* al país a la vez que ha despertado el temor de que se produzcan choques armados entre seguidores de los partidos tradicionales y los manifestantes anticorrupción.



ECONOMÍA MALTRATADA

Incluso antes de que la pandemia de coronavirus afectara al país, el Líbano parecía encaminarse a un colapso. Su deuda interna con respecto al producto interno bruto –lo que debe un país en comparación con lo que produce su economía– fue la tercera más alta del mundo. El desempleo se situó en el 25% y casi un tercio de la población vivía por debajo del umbral de pobreza.

A finales de 2019 también se reveló que el Estado era completamente consciente de que el Banco Central estaba llevando a cabo lo que era básicamente un esquema financiero piramidal, conocido como *esquema Ponzi*. El organismo pedía prestado a los bancos comerciales a unas tasas de interés superiores a las del mercado para pagar sus deudas y mantener fijo el tipo de cambio de la libra libanesa contra el dólar estadounidense. Al mismo tiempo, iba creciendo el malestar entre la población por el hecho de que el Gobierno no estaba siendo capaz de proporcionar ni siquiera los servicios básicos. Además, a los cortes de energía y la falta de agua potable se suman una atención médica pública limitada y una de las peores conexiones a internet del mundo.

La situación pone de relieve las profundas divisiones en la sociedad libanesa, donde muchos ciudadanos acusan a la élite política

dominante de acumular riqueza en lugar de realizar las amplias reformas necesarias para resolver los problemas del país.

INTENSIFICACIÓN DE LAS PROTESTAS

A principios de octubre de 2019, la escasez de moneda extranjera llevó a la libra libanesa a una fuerte depreciación frente al dólar en un mercado negro que resurgió por primera vez en dos décadas.

Cuando los importadores de trigo y combustible exigieron que se les pagara en dólares, los sindicatos convocaron huelgas.

Luego, incendios forestales desatados en las montañas de la parte occidental del país volvieron a poner de manifiesto la falta de fondos y el deficiente equipamiento de los bomberos.

A mediados de octubre, el Gobierno propuso nuevos impuestos sobre el tabaco, la gasolina y las llamadas de voz a través de servicios de mensajería como WhatsApp para aumentar sus ingresos, pero la reacción violenta de la población obligó a cancelar los planes.

Sin embargo, nada pudo frenar la oleada de descontento acumulada durante años.

Decenas de miles de libaneses salieron a las calles, lo que llevó a la renuncia del primer ministro respaldado por Occidente, Saad Hariri, y su gobierno de unidad.

Las protestas dejaron de lado incluso el habitual sectarismo político, algo que no sucedía desde que terminó la devastadora guerra civil sostenida entre 1975 y 1990.



Una vez nombrado el 21 enero de 2020, el nuevo primer ministro Hassan Diab anunció que Líbano no podría cumplir con sus compromisos de deuda externa por primera vez en su historia. La autoridad afirmó que sus reservas de divisas habían alcanzado un nivel “*crítico y peligroso*” y que era necesario mantener las que quedaban para pagar las importaciones esenciales.

LA PANDEMIA

A raíz de las primeras muertes por covid-19 y el aumento de las infecciones, el Gobierno impuso a mediados de marzo un confinamiento obligatorio para frenar la propagación de la enfermedad. Por un lado, esto obligó a los manifestantes antigubernamentales a abandonar las calles, pero, por otro, agravó la crisis económica y expuso las deficiencias del sistema de bienestar social del Líbano.

Muchos negocios se vieron obligados a despedir al personal o darle vacaciones sin sueldo y la brecha entre el valor de la libra libanesa en los tipos de cambio oficiales y la del mercado negro se amplió.

Además, los bancos endurecieron los controles de capital.

La inflación agravó mucho más la situación de las familias, incapaces de comprar ni siquiera los artículos para cubrir las necesidades mínimas.

Las crecientes dificultades económicas provocaron nuevos disturbios. En abril, soldados mataron a tiros a un joven durante una protesta violenta y varios bancos fueron incendiados.

Mientras tanto, el Gobierno finalmente aprobó un plan de recuperación con el que esperaba terminar con la crisis económica y obtener el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que debía conceder un paquete de rescate por valor de US\$10.000 millones.

Para cuando las restricciones de coronavirus comenzaron a levantarse en mayo, los precios de algunos alimentos se habían duplicado y el primer ministro advirtió que Líbano estaba en riesgo de caer en una “*gran crisis alimentaria*”.

“*Muchos libaneses ya han dejado de comprar carne, frutas y verduras, y pronto les resultará difícil pagar incluso el pan*”, escribió el WASHINGTON POST entonces.

DIFICULTADES PARA SALIR ADELANTE

La mayoría de los analistas apuntan a un factor clave: el sectarismo político. Son demasiados grupos que se ocupan de sus propios intereses.

Líbano reconoce oficialmente a 18 comunidades religiosas: cuatro musulmanas, 12 cristianas, la secta drusa y el judaísmo.

Las tres principales instituciones políticas –el presidente, el presidente del parlamento y el primer ministro– se dividen entre las tres comunidades más grandes (cristiana maronita, musulmana chiita y musulmana sunita, respectivamente) en virtud de un acuerdo que data de 1943.

Los 128 escaños del Parlamento también se dividen en partes iguales entre cristianos y musulmanes, incluidos los drusos.

Es esta diversidad religiosa la que hace del país un blanco fácil para la interferencia de las potencias externas.

Así sucede por ejemplo con el respaldo de Irán al movimiento chiita de Hezbollah, ampliamente considerado como el grupo militar y político más poderoso del Líbano.

Desde el final de la guerra civil (1990), los líderes políticos de cada secta han mantenido su poder e influencia a través de un sistema de redes de mecenazgo, protegiendo los intereses de las comunidades religiosas que representan y ofreciendo incentivos financieros, tanto legales como ilegales.

Líbano ocupa el puesto 137 de 180 países (donde 180 es el peor) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019. El organismo de control dice que la corrupción “*impregna todos los niveles de la sociedad*” en el Líbano, con los partidos políticos, el parlamento y la policía percibidos como “*las instituciones más corruptas del país*”. Argumenta, además, que es el propio sistema de compartir el poder lo que está alimentando estas redes de mecenazgo y obstaculizando un gobierno efectivo en el Líbano.

Fuentes
www.elpais.com
www.bbc.com
[@elperiodico](http://elperiodico)